



7° Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2024.

Oficio No. CGIT/CA/300/2461-2/2024-11

**MTRA. MIRIAM DE LOS ÁNGELES SAUCEDO MARTÍNEZ.  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
P R E S E N T E .**

En atención al oficio FGJCDMX/110/7881/2024-11, con la finalidad de atender la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 092453824003130 presentada por el peticionario LUIS ADRIÁN JIMÉNEZ GARCÍA, la cual fue planteada en los términos siguientes:

"SOLICITO A USTED SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO LOS OFICIOS COY-5/0096/11-2020 Y COY-5/00108/11-2020." SIC  
Información complementaria  
"OFICIOS EMITIDOS POR EL ENTONCES RESPONSABLE DE AGENCIA DE COY-5 JOSE FILIBERTO TAMAYO EN EL AÑO 2020" SIC

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, Apartado A fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 193, 194, 195, 200, 201, 209 y 211, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hoy Ciudad de México, se informa lo siguiente:

A fin de dar contestación a la solicitud, se giró oficio al Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán, quién envía respuesta mediante el Oficio No. FICOY/304/1642/11-2024 de 11 de noviembre de 2024, el cual se agrega al presente.

Lo anterior a efecto de que sea notificado el peticionario.

**A T E N T A M E N T E  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

**LIC. ELIZABETH CASTILLO GONZÁLEZ.**

C.c.c.p. Dr. Ulises Lara López. Coordinador General de Investigación Territorial. Presente. Para su superior conocimiento  
C.c.c.p. Lic. Jorge Antonio Morquecho González. Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C". Presente. Para su superior conocimiento



Ciudad de México, 11 de noviembre de 2024

**Oficio No.** FICOY/304/1642/11-2024

**Folio:** 092453824003130

**Referencia:** 2461-1/2024-11

**LIC. ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ**  
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO  
ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE  
INVESTIGACIÓN TERRITORIAL  
**P R E S E N T E**

En atención a lo solicitado en su oficio número **CGIT/CA/300/2461/2024-11** de fecha 04 de noviembre 2024, a la solicitud de información pública número de folio **092453824003130**, presentada por **LUIS ADRIAN JIMENEZ GARCIA**, información que fue planteada en los términos siguientes:

"SOLICITO A USTED SE ME HAGA DEL CONOCIMIENTO LOS OFICIOS COY-5/0096/11-2020 Y COY-5/00108/11-2020." SIC  
Información complementaria  
"OFICIOS EMITIDOS POR EL ENTONCES RESPONSABLE DE AGENCIA DE COY-5 JOSE FILIBERTO TAMAYO EN EL AÑO 2020" SIC

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 Apartado "A" párrafo segundo, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3, 193, 194, 195, 201, 209 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; TERCERO transitorio párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 58 fracción IX y 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se hace de su conocimiento que la información pública gubernamental es aquella que es generada, administrada o en posesión de este ente obligado, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones así establecidos en el artículo 2º. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; derivado de lo anterior y de conformidad a dicho ordenamiento, me permito informar lo siguiente:



Se hace mención que esta Fiscalía se encuentra imposibilitada para realizar una búsqueda con la información proporcionada por el peticionario, en el sistema informático denominado Sistema de Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP) Y (FSIAP) con el que cuenta este sujeto obligado, que tiene fundamento en el Acuerdo A/004/2015, del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal hoy Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en el cual se registran, controlan y dan seguimiento a las actuaciones del personal ministerial, policial y pericial.

Aunado a que la petición, no corresponde a información pública gubernamental, generada, administrada o en posesión de este Ente Obligado, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones así establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Que se considera como información pública gubernamental aquella que es generada, administrada o se encuentra en posesión de este Ente Obligado, accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de conformidad a dicha Ley, se expone de manera clara y precisa al particular, los conceptos normativos, a fin de que conozca plenamente su alcance, siéndolo siguiente:

Si bien, el peticionario ejerce su solicitud ante éste Sujeto Obligado a través del Derecho de Acceso a Información Pública, al respecto se puntualiza qué de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el derecho de Acceso a la Información Pública, implica que toda persona sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, (salvo en el caso de derechos de la Protección de Datos Personales), tiene derecho a requerir información registrada en los Archivos del Estado, derecho íntimamente relacionado con el principio de transparencia y rendición de cuentas; es decir, transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y



autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos.

En éste contexto, la solicitud de información de una carpeta de investigación, podrá ser atendida a través de una solicitud directa en materia penal formulada al Ministerio Público, por tratarse de un procedimiento penal en contra de particulares, con motivo de una denuncia o querella, cuya sustanciación y procedimiento de solicitud de información (como lo es la citada por el ciudadano), se formula al Representante Social, que en el ámbito de su competencia, proporcionará a los sujetos específicos (debidamente identificados) dentro del procedimiento de investigación, así justificará que actuó bajo el principio de legalidad fundando y motivando cada una de sus determinaciones, por lo que en términos del principio de legalidad, no puede llegar a considerarse la inobservancia de un procedimiento (Leyes especiales), pues se traduciría en una intromisión y contravención al mismo.

Así, la solicitud de la particular debe atenderse a través de un acto administrativo que ejerce una autoridad, (Agente del Ministerio Público) a un trámite o gestión realizado por un ciudadano, con estricto apego al procedimiento específico normado para ello, y como se ha dicho al tratarse de un trámite en materia penal, que es parte de alguna averiguación previa, se informa al particular que el mismo se realiza ante el personal del Ministerio Público, que conoce o conoció de la indagatoria aludida, iniciada con motivo de una denuncia o una querella, el cual está sujeto a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la materia, como es el Código de Procedimientos Penales, acto administrativo (procedimiento específico) que el personal del Ministerio Público desahoga mediante un acuerdo, en el cual se pronuncia sobre la procedencia de dicha petición, atención que proporciona de conformidad al marco legal de la materia; y en el caso concreto que nos ocupa se debe tener muy en cuenta que la información o diligencias practicadas respecto a una carpeta de investigación, encuadran perfectamente dentro del ámbito de aplicación de las Leyes Penales, por ser éstas las Leyes especiales en la materia referida. Ello, en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos



Mexicanos, la autoridad competente deberá fundar y motivar la causa legal del procedimiento, esto es, que el Ministerio Público, deberá observar la legalidad y formalidad del procedimiento, conduciendo su actuar bajo los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Por lo que, en cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 y 10 párrafo tercero de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, que establece que cuando se advierta que un solicitante a través de una solicitud de acceso a Información Pública presentada ante la Oficina de Información Pública desahogue una solicitud a cargo del Ente Obligado, se le orientará sobre el procedimiento establecido a realizar para acceder al mismo, por ello se procede a explicar al particular el procedimiento en materia penal, atendiendo al marco legal de la materia, en los términos de la normatividad siguiente:

De la lectura al artículo 20, apartado B (De los derechos de toda persona imputada), fracción VI, se tiene como uno de sus derechos a que sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

Asimismo, el artículo 20 Apartado C. (Derechos de la víctima o del ofendido), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los derechos que consagra, se encuentra el de recibir asesoría jurídica; y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

De lo anterior, se infiere que el imputado, denunciante, querellante y víctima u ofendido tienen derecho de acceder al expediente para informarse sobre el estado y avance de la indagatoria, tienen el derecho a que se le faciliten los datos que requieran que consten en las averiguaciones previas, para lo cual deberán acreditar su personalidad y situación jurídica o estado jurídico en la misma sobre el derecho que hagan valer, para poder acceder a la información o documentos integrantes del expediente o información como la que solicita el particular. Bajo esa tesitura se tiene que el derecho de acceso a la información no es la vía para que el peticionario acceda a la información de su interés.







Toda violación a este deber por parte de los servidores públicos, implica la imposición de las sanciones por la legislación aplicable, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lo anterior en cumplimiento a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual consiste en los mandamientos escritos de la autoridad competente deberán estar fundados y motivados las causas legales del procedimiento esto es, que el Ministerio Público, deberá observar la legalidad y formalidad del procedimiento debiendo conducirse bajo los principios de legalidad, certeza honradez, lealtad, objetividad imparcialidad, profesionalismo transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Por lo que se concluye, que la solicitud del peticionario corresponde a un procedimiento en materia penal sujeto a los términos y condiciones de la normatividad aplicable en la materia como se ha expuesto en líneas precedentes.

De ahí, para que la particular acceda a la información de su interés, deberá acreditar el interés jurídico, a través del derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, el cual jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el estado de permitir al ciudadano presentar ante los diversos órganos de gobierno una petición, se le dé respuesta, de lo que a derecho corresponda de acuerdo a su petición, como es la información de su interés.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. AMIRA ALEJANDRA HERNANDEZ ENRIQUEZ**  
**FISCAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL**  
**EN COYOACÁN**